



Examinada su solicitud de informe, remitida a este Gabinete Jurídico, referente al Proyecto de Orden por la que se modifica la Orden ECO/697/2004, de 11 de marzo, sobre la central de Información de Riesgos, solicitado de esta Agencia Española de Protección de Datos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37 h) de la Ley Orgánica, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, y 5 b) del Estatuto de la Agencia, aprobado por Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo, cúmpleme informarle lo siguiente:

Antes de entrar a analizar el texto sometido a informe es preciso señalar que, habida cuenta de la fundamentación legal del informe que inmediatamente va a evacuarse y su carácter preceptivo, a tenor de lo dispuesto en las normas que acaban de señalar, debería indicarse en la Exposición de Motivos de la norma, que no se adjunta con el texto, que la misma ha sido sometida al previo informe de la Agencia Española de Protección de Datos.

El Proyecto sometido a informe introduce determinadas modificaciones en los apartados 1 y 4 del artículo 3 de la Orden ECO/697/2004, encaminadas a la posible determinación de los umbrales de declaración a la Central de Información de Riesgos por parte de las entidades obligadas, de forma que como consecuencia de la reforma operada dichos umbrales, que pasaran a expresarse en unidades de euro, podrán ser variables en función de las características y circunstancias de los riesgos declarados así como del sector o naturaleza del titular que genera tales situaciones de riesgo. Del mismo modo, se prevé que el Banco de España pueda determinar los supuestos en los que no sea necesaria la declaración de la totalidad de los datos a los que se refiere la Orden.

El texto se acompaña de una nota informativa relacionada con el mismo en la que se señala que las previsiones objeto de análisis son resultado de las medidas que habrán de adoptarse en cumplimiento del Memorando de Entendimiento aprobado en el marco de la asistencia financiera recibida por España, que exige en su apartado 26 “un perfeccionamiento del registro público de créditos”, lo que parece exigir una mejora de la calidad de la información que habrá de ser facilitada por las entidades al supervisor a fin de controlar la solvencia de las entidades supervisadas. Del mismo modo se indica que la reforma se enmarca en un proyecto de modificación por parte del Banco de España de la Circular 3/1995, de 25 de septiembre, reguladora de la Central de Información de Riesgos del Banco de España, indicando que las reformas operadas por el Proyecto tienen por objeto otorgar una cobertura suficiente a alguna de las reformas que se operarán como consecuencia de la nueva Circular que en su momento se adopte por el Órgano Supervisor.



Como punto de partida, tenerse en cuenta la naturaleza especial del fichero al que se viene haciendo referencia, y configurada por el artículo 59.primerº de la Ley 44/2002, a cuyo tenor “la Central de Información de Riesgos (en adelante CIR) es un servicio público que tiene por finalidad recabar de las entidades declarantes a que se refiere el apartado primero del artículo siguiente, datos e informaciones sobre los riesgos de crédito, para facilitar a las entidades declarantes datos necesarios para el ejercicio de su actividad; permitir a las autoridades competentes para la supervisión prudencial de dichas entidades el adecuado ejercicio de sus competencias de supervisión e inspección; contribuir al correcto desarrollo de las restantes funciones que el Banco de España tiene legalmente atribuidas”.

Teniendo en cuenta esta doble finalidad y la necesidad de mejorar la calidad de la información contenida en el fichero el nuevo texto reemplaza el sistema de umbral único por un umbral variable en que se puedan fijar distintas cantidades mínimas a declarar en función de los titulares y clases de riesgo, indicando la nota informativa que “se considera que en algunos supuestos está justificado solicitar información a determinados titulares o con respecto a determinadas actividades, aun cuando su umbral de riesgo pueda ser inferior”.

Pues bien, desde el punto de vista de la finalidad de la Central de Información de Riesgos como medio para la adecuada supervisión e inspección del riesgo contraído por las entidades de crédito, no cabe duda que la determinación de umbrales específicos en atención a la naturaleza de los riesgos que pueden generarse como consecuencia de la distinta tipología del titular o de las circunstancias en que el riesgo se contrae resulta adecuado al principio de proporcionalidad consagrado por el artículo 4.1 de la Ley Orgánica 15/1999, a cuyo tenor “Los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento, así como someterlos a dicho tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido”.

Igualmente, la cuantificación de la deuda en unidades de euro debe considerarse ajustada a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, toda vez que su artículo 4.3 dispone que “los datos de carácter personal serán exactos y puestos al día de forma que respondan con veracidad a la situación actual del afectado”.

Ahora bien, la cuestiones se suscitan en cuanto a la finalidad de la Central de Información de Riesgos como fuente de información de las restantes entidades sometidas al sistema, por cuanto no aparece terminantemente claro si la medida a adoptar afectará no sólo a la obligación de declarar, sino a la información facilitada a las citadas entidades conforme a lo previsto en el artículo 61 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de medidas de reforma del sistema financiero.



De este modo, sería preciso que se clarificase si la modificación de los umbrales de declaración afectará a los relacionados con la información contenida en los informes a los que se refiere el artículo 61 de la citada Ley, lo que podría exigir una modificación del artículo cuarto de la Orden, dado que el párrafo segundo de su apartado primero prevé en su inciso final que “en los informes no se facilitarán los datos que se refieran a pertenencia del titular a un determinado grupo económico, tipo de interés, fechas de inicio, vencimiento e incumplimiento, ni las categorías prudenciales de riesgo ni demás datos que se consideren necesarios exclusivamente para el adecuado ejercicio de las facultades de supervisión e inspección de las entidades declarantes por parte de las autoridades competentes”.